

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 23 de octubre de 2023, comparece doña María Jesús Peredo Rojas, abogada, en representación de **María Ayuda Corporación de Beneficencia**, en adelante “la reclamante” o “la Corporación”, quien deduce recurso de reclamación, en contra de la Resolución Exenta N° 1.202 de 2 de octubre de 2023, notificada el día 11 del mismo mes y año, dictada por la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante “*el Servicio*”, que rechazó la reclamación interpuesta por su parte y aplicó la sanción consistente en una multa del 20% de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero promedio de los últimos 3 meses, por infracción a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 21.302.

Previa referencia a los antecedentes generales del funcionamiento de la institución recurrente en cuanto a las capacitaciones realizadas a los equipos residenciales, expone que los hechos que dan origen a la fiscalización dicen relación con que el día 14 de octubre del año 2022, el adolescente de iniciales I.G.V. vigente a esa fecha en REM-PER Nuestra Sra. de la Esperanza de Iquique de vela en Unidad de Corta Estadía del Hospital Regional de dicha comuna, haber sido víctima de una agresión física por parte de quien, hasta ese momento, era Directora de dicha residencia, doña Paola Arias, indicando que lo habría amarrado a una silla, lo que originó que se comunicara dicha circunstancia al Juzgado de Familia pertinente.

En razón de la denuncia realizada ante el Tribunal de Familia competente, Carabineros de Chile realiza el retiro de copia de las cámaras de seguridad del día de la agresión, y se ordena por la judicatura el ingreso del adolescente en la UCIP del Hospital en que se encontraba, además de prohibir cualquier acercamiento o comunicación de la Directora sindicada como agresora.

Refiere la parte reclamante que, ante la develación de los hechos, la Corporación adoptó de manera urgente e inmediata las siguientes medidas, a saber: **a)** revisión de cámaras de seguridad por parte de la abogada y la supervisora técnica de la Dirección Social; **b)** activación del procedimiento establecido en la Resolución Exenta N°155 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, realizándose la correspondiente denuncia ante Ministerio Público; **c)** activación del caso en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXVXXNQZXE

Plataforma SIS, por parte de la Supervisora Técnica; **d)** envío de oficio por parte de la abogada encargada a la causa proteccional; y **e)** instrucción, por parte del Director Ejecutivo de María Ayuda Corporación de Beneficencia, de una investigación interna.

En cuanto a esta última medida, profundiza la actora señalando que a través de Resolución N° 002/2022 se designó como investigadora a doña Josefina Dreves, Directora de Gestión de Casa Central de María Ayuda, decretándose, asimismo, por parte del Director Ejecutivo, la separación inmediata del espacio residencial y de sus funciones a la ex Directora Armijo.

A modo conclusivo, el informe resultado de la investigación, entregado 8 días corridos después de su inicio, establece que existió una crisis conductual del niño I.G.V., la que fue contenida por equipo residencial y Directora de la Residencia, de acuerdo a la normativa vigente, advirtiéndose, de acuerdo al video revisado, una contención física, la cual no resultaría adecuada conforme a lo establecido por las Directrices para la Promoción del Bienestar, Prevención y Abordaje Integral de Desajustes Emocionales y Conductuales asociadas a Salud Mental en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en cuidado alternativo residencial, detallando al respecto las medidas tomadas luego del resultado de la investigación.

Manifiesta la reclamante que frente a lo informado por parte del organismo colaborador, la recurrida inició un proceso de fiscalización estableciendo como primer incumplimiento la grave contención física realizada por la antigua Directora del programa, sin indicar, según afirma, la causalidad o culpabilidad del organismo, y como segundo incumplimiento, la falta al deber de denuncia oportuna por los hechos acaecidos el 13 de octubre de 2023, sin que se especificara con más detalle.

Sostiene que su parte, frente a la develación de alguna situación que implique afectación de niños, niñas o adolescentes atendidos, actúa en todo momento con una esmerada diligencia, que permita no solo esclarecer la ocurrencia de los hechos, sino también la interrupción inmediata de estas circunstancias y la generación de nuevas estrategias para prevenir su concurrencia, lo que a su juicio, es reconocido por la reclamada, quien considera la infracción como grave y no gravísima.

Refiere adicionalmente que gracias al proceso interno de investigación se tomó conocimiento que la desregulación del adolescente se habría producido no solo el 14 de octubre, sino que además fue el día 13, ocurriendo la contención física en dicha oportunidad.



Finalmente, y en cuanto a los aspectos de hecho que fundan sus alegaciones, argumenta que la sanción consistente en una multa del 20 por ciento de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero promedio de los últimos tres meses, resulta extemporánea, desproporcionada, sin una justificación plausible ni la claridad de cuál es la conducta exigible a la Corporación, distinta a las medidas ya adoptadas respecto de la situación ocurrida, tanto previo a su ocurrencia como con posterioridad a ella, afectando principios generales del proceso administrativo e incluso el derecho al Debido Proceso.

Prevía referencia a los artículos que estima pertinentes, contenidos en la Ley N° 21.302, esgrime la reclamante que resulta preciso destacar que desde el mes de enero del año 2021 se habría solicitado al Servicio de Mejor Niñez una oferta más especializada y acorde a las necesidades del adolescente de autos, señalándose por dicho Servicio que no se contaba oferta en la región, lo que dilató el traslado del mismo, en consideración al desarraigo expuesto en su oportunidad por la respectiva Curadora Ad Litem.

Indica además como alegaciones la reclamante que la sanción aplicada a su parte infringe el principio de celeridad; culpabilidad; falta de motivación; además del principio de non bis in ídem, por los fundamentos que señala.

Por todo lo expuesto, solicita se acoja el recurso incoado, y en consecuencia se deje sin efecto la sanción impuesta a su parte.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, comparece el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a través de la abogada doña Macarena Mekis, quien solicita el rechazo de la reclamación judicial, por cuanto, a su juicio, los hechos materia del recurso corresponden a actuaciones realizadas conforme a derecho, en el marco de las atribuciones que la Ley otorga al Servicio.

Prevía referencia a los antecedentes del proceso, detallando las etapas del mismo, además de establecer los términos de la visita de fiscalización, refiere que a partir de la pauta levantada en dicha oportunidad y los demás antecedentes, se instruyó por parte del Servicio, el 14 de noviembre de 2022, y a través de la Resolución Exenta N° 148, un procedimiento administrativo sancionatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 21.302, en contra de la reclamante.

En el marco de dicho proceso sancionatorio, el 22 de noviembre del mismo año se formularon los cargos que individualiza, consistentes en: a) Contención física inadecuada del niño el día 13 de octubre de 2022, entre las



16:30 y las 17:00 horas por parte de la ex Directora del Programa; y b) No haber aplicado el procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes, aprobado por Resolución Exenta N° 155 de 2022 de la Directora Nacional del Servicio, ambos catalogados como infracciones de carácter grave, proponiéndose en el informe final la sanción que finalmente resultó impuesta.

Respecto de dicha resolución, informa que la entidad reclamante presentó recurso de reclamación administrativa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 21.302, el cual fue rechazado, confirmando la decisión de la autoridad regional, toda vez que los cargos habrían quedado suficientemente acreditados, constituyendo los mismos una infracción grave, verificándose el literal a) del artículo referido, esto es, la vulneración grave de la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes sujetos a atención del Servicio, además de ser considerada la atenuante contenida en el artículo 43 de la Ley N° 21.302.

Por todo lo expuesto, y luego de referir el derecho que funda su actuar, solicita se rechace en todas sus partes la reclamación de ilegalidad interpuesta en su contra, declarando que las medidas adoptadas por el Servicio se han ajustado a la normativa vigente, con costas.

Tercero: El artículo 45 de la Ley N° 21.302, en lo pertinente al presente reclamo de ilegalidad, establece lo siguiente:

“Procedimiento de reclamación. El colaborador acreditado afectado por la aplicación de una de las sanciones contenidas en el artículo 41 podrá reclamar administrativamente ante el Director Nacional dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución.

En contra de la resolución que deniegue la reclamación administrativa el colaborador afectado podrá reclamar fundadamente ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio la ilegalidad de la misma dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución. Dicha reclamación tendrá efecto suspensivo.”

Cuarto: Ahora bien, del reclamo de ilegalidad presentado, se puede colegir que son tres los motivos de ilegalidad que denuncia la entidad reclamante: **a)** Incumplimiento del Servicio reclamado en cuanto entregar a la reclamante una mejor oferta acorde las necesidades del joven I.G.V. y así generar el acompañamiento del organismo colaborador, infringiendo con ello los artículos 2 y 2 bis de la Ley N° 20032; **b)** Falta al principio de celeridad, y **c)** Afectación de principios generales aplicables al proceso sancionatorio



administrativo, como son falta a los principios de culpabilidad, de motivación de la resolución y de non bis in ídem.

Quinto: En lo que se refiere al primer motivo de ilegalidad, cabe señalar que dicha alegación se sustenta en hechos anteriores a lo acontecido el día 13 de octubre de 2022, con el adolescente de iniciales I.G.V., pues en el reclamo se indica que en enero de 2021 se solicitó al Servicio reclamado una oferta más especializada y acorde a las necesidades del adolescente antes referido, organismo que informó no contar con oferta en la Región, lo que dilató el traslado del joven y solo accedió a esa petición una vez que se genera la afectación del niño.

Que, no obstante, aun cuando esa circunstancia sea efectiva, aquello en nada desvirtúa los cargos formulados en la investigación pertinente, consistentes básicamente en: **a)** No haber formulado oportunamente la denuncia por ese hecho a la autoridad fiscalizadora, infringiendo con ello el artículo 14 de la Ley N° 20.032, como la Resolución N° 155 de 2022 del Servicio reclamado y **b)** Contención física inadecuada del niño el día 13 de octubre de 2022 por la Ex Directora del programa REM-PER Nuestra Señora de la Esperanza, a cargo del colaborador acreditado “María Ayuda Corporación de Beneficencia”, infringiendo así el artículo 41 inciso 3° letra a) de la Ley N° 21.302.

En efecto, lo esgrimido por la reclamante carece de todo vínculo causal con la infracción constatada, pues la reprochable reacción de la ex funcionaria de la residencia, -esto es haber sentado al niño sobre ella, en un sillón, inmovilizándolo de pies y manos y ocasionándole lesiones de diversa consideración,- fue objeto de la investigación y eso demostró que la funcionaria actuó con total desapego de la normativa que asegura un trato adecuado y respetuoso hacia los menores de 18 años, tal como lo indica el artículo 2° letra a) de la Ley N° 20.032.

En tal virtud, el primer reproche de ilegalidad carece de fundamento.

Sexto: En lo que concierne al segundo motivo de ilegalidad, esto es la infracción prevista al principio de celeridad, se invoca el artículo 7° de la Ley N° 19.880, arguyendo que el Servicio reclamado, contado desde que se activó la actuación de su representada hasta informe final, excedió los plazos previstos en los instructivos del Servicio sobre los lineamientos del proceso de fiscalización, en particular la Resolución Exenta N° 172, de fecha 16 de febrero de 2023.



Cabe precisar, al respecto, que el Servicio reclamado, según su informe, solo tomó conocimiento de lo acontecido el día 2 de noviembre de 2022, mediante una visita inspectiva al REM-PER Nuestra Señora de la Esperanza, habiendo transcurrido a esa fecha más de 15 días desde la ocurrencia del hecho investigado, esto es el 14 de octubre del mismo año.

Según la reclamante, avisó al Servicio ocurrido, con fecha 28 de octubre, dato que no es confirmado por la reclamada.

Lo anterior ya le resta vigor a la alegación de haberse infringido el mentado principio de celeridad, pues -en rigor- fue la propia reclamante la que demoró en dar noticia de lo ocurrido al Servicio, infringiendo con ello su obligación de “*denunciar de inmediato*” esa situación a la autoridad fiscalizadora competente, como lo establece el artículo 14 de la Ley N° 20.032, precitado, complementado por la Resolución Exenta N° 155 de 14 de marzo de 2022, del Servicio reclamado, particularmente en sus números 1 y 2.

En este entendido, entonces, la investigación sumaria ordenada instruir mediante Resolución N° 148, de 14 de noviembre de 2022, por la Dirección Regional de Tarapacá y que culmina con el Informe Final sancionatorio de 9 de enero de 2023, parece efectuada en un plazo razonable, máxime si se tiene, además, presente que a esta última fecha no se había dictado la Resolución N° 172 de 16 de febrero de 2023, por el Servicio reclamado, la cual estableció plazos más acotados en la tramitación del proceso sancionatorio, tal como lo señala la reclamante.

En virtud de lo anterior, debe también desestimarse el segundo motivo de ilegalidad, antes referido.

Séptimo: En cuanto al tercer y último motivo de ilegalidad invocado por la reclamante, corresponde hacerse cargo del primer aspecto, consistente en afectación del principio de culpabilidad.

Lo cierto es que ninguna de las infracciones constatadas puede ser desvirtuada por esta alegación. En efecto, es claro de las disposiciones citadas previamente, esto es, los artículos 2 letra a) y 14 incisos 1, 2 y 3 de la Ley N° 20.032, que la responsabilidad de las infracciones recae “...*en los directores o responsables de los proyectos de protección especializada y los profesionales que den atención directa a los niños, niñas y adolescentes...*” cuando “*vulneren sus derechos*”, todo lo cual constituye una falta grave, sancionada en el artículo 41 de la Ley N° 21.302.

Pues bien, en la especie la responsable de la contención inadecuada fue la directora, a esa época, del proyecto, quien después fue desvinculada,



pero en ese momento era dependiente de la Corporación. Por otro lado, correspondía a la representante legal de la Corporación dar cuenta oportuna de esta situación al Servicio recurrido, lo que no hizo, como se ha analizado en los considerandos precedentes.

Por lo anterior, es claro que el principio de culpabilidad no ha sido vulnerado, como sostiene la reclamante, por lo que esta alegación tampoco puede prosperar.

Octavo: En lo que concierne a una falta de motivación de la resolución que se pronuncia sobre la sanción impuesta, debe desecharse ese argumento, pues de la sola lectura de ese acto administrativo, esto es la Resolución N° 1.202 de 27 de septiembre de 2023, dictada por el Servicio reclamado, que consta de 9 páginas y 21 considerandos, se puede colegir claramente que no son efectivas las alegaciones que arguye la Corporación, pues en ese acto el Servicio se hace cargo de todos los argumentos que indica esa parte en su recurso de reclamación administrativa.

Del mismo modo, la Resolución N° 15 de 13 de enero de 2023, de la Directora Regional de Tarapacá del Servicio reclamado (que consta de 3 páginas y seis considerandos), así como el Informe Final de 9 de enero de 2023, que le antecede se encuentran suficientemente fundados, por lo que este ítem de ilegalidad tampoco puede prosperar.

Noveno: Por último, en lo que respecta al último aspecto de este tercer motivo de ilegalidad, al haber sido sancionada la Corporación reclamante por haber infringido el artículo 41 inciso 3° letra a) de la Ley N° 21.302, esto es "*La vulneración de la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas o adolescentes sujetos de atención del Servicio*", no correspondía agravar la responsabilidad de la investigada con la modificatoria contemplada en la letra a) del artículo 44 de la misma ley, esto es "*El hecho de haberse vulnerado la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas o adolescentes sujetos de atención del Servicio*", pues efectivamente, tal como lo señala la Corporación reclamante, se está considerando dos veces una misma circunstancia para los efectos de agravar la sanción aplicable.

En otras palabras, si la agravante referida describe el mismo hecho que ya fue objeto de infracción, no puede considerarse nuevamente esta misma circunstancia para aumentar la responsabilidad de la infractora.

Así las cosas, y siendo aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, los principios del Derecho Penal Sustantivo, como lo señala, entre otros el autor Eduardo Cordero Quinzacara, en su artículo "Los



principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho chileno” (Publicado en Revista de Derecho de Universidad Católica de Valparaíso, Volumen XLII, 2° Semestre 2014, pp. 408-409, 427), entre los cuales se inserta el del *Non Bis in Ídem*, además de jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (v.g. Rol 337-2021, sentencia 2 agosto 2021, considerando quinto) y teniendo especialmente presente para este efecto lo dispuesto en el artículo 63 inciso 1° del Código Penal, deberá acogerse este motivo de ilegalidad, alegado por la reclamante.

Décimo: Sin perjuicio de lo anterior, dado que en la especie se impuso la sanción en su tramo inferior, aun cuando se acoja la alegación de la reclamante, en los términos expuestos en el motivo precedente, aquello no influye en lo dispositivo de la Resolución impugnada, pues existiendo una sola atenuante y tratándose de una infracción grave, la cuantía de la sanción impuesta se ajusta a derecho, toda vez que fue aplicada en su mínimo.

Con el mérito de lo razonado en los fundamentos precedentes, más lo dispuesto en los artículos 35, 41, 42, 43 y 45 de la Ley N° 21.302; artículo 14 de la Ley N° 20.032 y 63 inciso 1° del Código Penal, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducido por María Ayuda Corporación de Beneficencia en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Contencioso Administrativo-678-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXVXXNQXZE



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXVXXNQZXE

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Ministra Suplente Lidia Poza M. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, veintiseis de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiseis de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BXVXXNQZXE